

# La proliferación de los grupos paramilitares en el sur de México: ¿estrategia de Estado o batalla entre élites políticas locales?

PATRICIA OLNEY, PH.D.\*

Artículo recibido: 14/04/2011

Artículo aprobado: 26/08/2011

Para citar este artículo: Olney, Patricia (2011). La proliferación de los grupos paramilitares en el sur de México: ¿estrategia de Estado o batalla entre élites políticas locales? *Desafíos* 23-II, pp. 83-121.

## Resumen

*Este ensayo busca poner en perspectiva el surgimiento de las organizaciones paramilitares en Chiapas desde los inicios de la rebelión zapatista en 1994. Se sostiene que al contrario de lo que sugieren la mayoría de los autores que tratan el tema de los paramilitares mexicanos, éstos no se pueden entender como una estrategia de Estado. Más bien, la existencia de los paramilitares revela una guerra entre élites en pugna por el poder con visiones incompatibles de la democracia y el “buen gobierno”. La polarización inherente a este tipo de lucha ha llevado a que muchos actores locales apoyen un lado u otro de los grupos en conflicto. La presencia de grupos radicales de la izquierda en zonas indígenas, de colonización reciente y con poca presencia del Estado da lugar a una radicalización de las*

---

\* Profesora, Southern Connecticut State University, New Haven, Connecticut. Doctora en Relaciones Internacionales, Universidad de Miami.

*élites de la región. Las condiciones y las dinámicas que explican el protagonismo de los paramilitares son el resultado de múltiples factores. Además del entorno internacional después de la Guerra Fría, conviene tener en cuenta consideraciones nacionales como la inatención a los asuntos de seguridad de 1989 hasta 1993, las políticas gubernamentales entre 1968 y 1993 que sembraron las semillas de una situación pro-revolucionaria en un contexto neoliberal y los cambios consecutivos a la modernización acelerada de la sociedad. Hacen falta más estudios acerca de los grupos paramilitares y sus nexos con actores nacionales y transnacionales para complementar este estudio enfocado en sus orígenes.*

**Palabras clave:** *paramilitares, México, EZLN, Chiapas, democracia, ideología, modernización, política local, presidentes, movimientos sociales, Teología de la Liberación, pueblos indígenas, élites, élites locales, evangélicos,*

## The Proliferation of Paramilitary Groups in Southern Mexico: State Strategy or Struggle between Local Political Elites?

### Abstract

*This study traces the origins of Mexican paramilitary groups and argues that, contrary to what most of the literature on the subject implies, they do not represent a state strategy to thwart leftist groups seeking social change. Rather, they represent battles between groups of national and local-level elites with different visions of democracy and of what constitutes good governance. The polarization inherent in this type of conflict leads local actors to have to side with one faction of elites or the other. The presence of radical leftist groups in recently colonized indigenous areas with scant state presence gives rise to a process of radicalization among local elites. There are multiple factors that explain the emergence of paramilitary groups. Aside from the post Cold War international context, there were national factors like a shift in its focus away from security matters between 1989 and 1993, and presidential policies between 1968 and 1993, that planted the seeds of leftist radicalism in a context of rapid modernization.*

**Key words:** *paramilitaries, Mexico, EZLN, Chiapas, democracy, ideology, modernization, local politics, subnational politics, social movements, Liberation Theology, indigenous peoples, elites, local elites, protestantism.*

## A proliferação dos grupos paramilitares no sul do México: Estratégia de Estado ou batalha entre elites políticas locais?

### Resumo

*Este ensaio busca pôr em perspectiva o surgimento das organizações paramilitares em Chiapas desde os inícios da rebelião zapatista em 1994. Sustenta-se que ao contrário do que sugere a maioria dos autores que tratam o tema dos paramilitares mexicanos, estes não se podem entender como uma estratégia de Estado. Doutra modo, a existência dos paramilitares revela uma guerra entre elites em pugna pelo poder com visões incompatíveis da democracia e o “bom governo”. A polarização inerente a este tipo de luta tem levado a que muitos atores locais apóiem um lado ou outro dos grupos em conflito. A presença de grupos radicais da esquerda em zonas indígenas, de colonização recente e com pouca presença do Estado, da lugar a uma radicalização das elites da região. As condições e as dinâmicas que explicam o protagonismo dos paramilitares são o resultado de múltiplos fatores. Além do entorno internacional depois da Guerra Fria, convém ter em conta considerações nacionais como a inatenção aos assuntos de segurança de 1989 até 1993, as políticas governamentais entre 1968 e 1993 que semearam as sementes de uma situação pró-revolucionária em um contexto neoliberal e as mudanças consecutivas à modernização acelerada da sociedade. Precisam-se mais estudos acerca dos grupos paramilitares e seus nexos com atores nacionais e transnacionais para complementar este estudo enfocado em suas origens.*

**Palavras chave:** *Paramilitares, México, EZLN, Chiapas, democracia, ideologia, modernização, política local, presidentes, movimentos sociais, teologia da liberação, povos indígenas, elites, elites locais, evangélicos.*

## Introducción

La emboscada del 27 de abril de 2010 a una caravana humanitaria, que tenía como propósito auxiliar a unas 700 familias asediadas por el grupo paramilitar<sup>1</sup> “Unión para el Bienestar Social de la Región Triqui” (UBISORT) en la zona del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, fue un incidente más que se sumó a una larga cadena de ataques paramilitares en el sur de México desde mediados de los años 90. Muchos de estos ataques se han desarrollado en localidades donde han surgido movimientos sociales y guerrilleros que exigen establecer zonas autónomas en regiones con poblaciones indígenas. En el caso mencionado, 30 hombres enmascarados abrieron fuego sobre la caravana, provocando la muerte de dos activistas de nacionalidad finlandesa y mexicana (Díaz, 2010).

Al igual que la masacre perpetrada en 2002 en Agua Fría, Guerrero, en la que fueron acribillados 27 campesinos, y la matanza de Acteal, Chiapas, en 1997, donde murieron 45 indígenas católicos pacifistas, el ataque tomó lugar en una de las regiones más pobres de México con una geografía difícil y poca presencia del Estado. La región tiene también en común con los otros casos mencionados una historia de conflictos entre élites rurales o urbanas de izquierda y derecha y el hecho de haber entrado en un proceso de modernización acelerado que ha contribuido a debilitar su tejido social, generando vacíos de poder y divisiones en las comunidades.

De manera general, las organizaciones paramilitares del sur de México pueden ser analizadas como una reacción a la abdicación del Estado ante su deber de hacer justicia. Al permitir que diversos movimientos de izquierda invadan y reclamen territorios, el Estado tiende a desaparecer como garante de la ley. En muchas ocasiones, el paramilitarismo hace referencia a la privatización de la represión del Estado aunque es un fenómeno multidimensional y evolutivo que

---

<sup>1</sup> El término “paramilitares” aquí concuerda con las descripciones elaboradas por Koonings y Kruijt (2004: 25-27): son grupos armados que defienden intereses de tinte ideológico conservador, imitando a las fuerzas del orden sin formar parte de las mismas y que se “especializan en el ejercicio de violencia política semi-clandestina en un contexto de creciente polarización social o de conflictos civiles de baja intensidad”. (Traducción propia)

presenta matices aún más si se compara entre países. El déficit de ley en una zona (por más injusta e informal que esta ley haya sido) puede contribuir a que actores locales se sientan los garantes de la misma. Por lo tanto, la mayoría de los ataques atribuidos a unidades paramilitares se inscriben en contextos particularmente confusos: las violencias son difíciles de identificar y pueden relacionarse con simples venganzas, rencillas familiares o disputas puntuales.

Muchos de los autores que tratan el tema ven a los paramilitares como una extensión de las guerras sucias de la Guerra Fría, sólo que en la era democrática de la post-Guerra Fría, la represión del Estado se delega a grupos privados (Lofving, 2004; Moksnes, 2004; Norget, 2005; Olesen, 2005; Stahler-Sholk 1998), permitiendo que el Estado pueda tener la trayectoria en protección de derechos humanos propia de una democracia. Sin embargo, a pesar de que hay evidencia de nexos entre representantes del Estado y los grupos paramilitares, estos nexos se hallan lejos de consistir en una estrategia y más bien están asociados con élites locales que resisten las políticas del Estado y ni siquiera aquéllas se pueden ver como una causa principal del fenómeno. Más que una actividad de élites racistas en áreas indígenas que se oponen al cambio y explotan las divisiones entre las comunidades para defender sus intereses, el fenómeno paramilitar evidenciado en Chiapas es en primer lugar una expresión de la ausencia o la ineffectividad de la ley. Asimismo, el paramilitarismo es sintomático de una ruptura de los equilibrios sociales y políticos en el ámbito rural, la cual propicia un vacío que se va llenando con cualquier protagonista violento que se sienta lo suficientemente poderoso para afirmarse. Al ceder territorio a los movimientos sociales que lo reclaman, el Estado deja un vacío del poder a pesar de sus buenas intenciones, lo que puede conducir al re-establecimiento de cacicazgos que el propio Estado había tardado décadas en desplazar. De esta manera, fuerzas estatales que pretenden promover los intereses de la gente humilde y fomentar procesos de cambio facilitan más bien el retorno a estructuras y mecanismos de poder tradicionales.

Como se demostrará en las siguientes páginas, los paramilitares operando en Chiapas constituyen la contraparte de organizaciones

de izquierda a las que se enfrentan, bien sean grupos guerrilleros (como el “Ejército Zapatista de Liberación Nacional” - EZLN) o movimientos sociales considerados como radicales (la “Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca” –APPO, por ejemplo). Todos los actores armados representan conductos a través de los cuales grupos de élite luchan por defender sus intereses e imponer su visión del “buen gobierno,” especialmente en lo que atiene a las políticas económicas. Los grupos paramilitares de la región no se manifiestan tanto porque un Estado fuerte busca nuevas formas para reprimir a sectores de la población, sino porque el mismo Estado tiene dificultades para ejercer un control sobre el territorio y los ciudadanos. En una época en la que el autoritarismo y la revolución carecen en muchos aspectos de legitimidad, el paramilitarismo es ilustrativo de una lucha entre élites para apropiarse del discurso de la democracia como condición para llegar al poder. Por otra parte, es un encarnación violenta de las disputas entre las élites modernas de la capital del país y las élites más tradicionales del medio rural, al igual que una forma paroxística de oposición entre las élites reformistas presentes en todas las corrientes políticas y las élites del antiguo sistema político que fue dominado por un solo partido durante décadas.

De manera específica, el presente texto se enfoca en localidades de Chiapas, una de las zonas de mayor conflictividad en México, junto con las principales regiones en disputa entre los miembros de la criminalidad organizada asociada al narcotráfico, a lo largo de los últimos años.

### **Antecedentes históricos: modernización y competencia religiosa**

Desde 1950 la incursión brusca de grandes cambios inherentes a la modernización empezó a hacer estragos en las zonas indígenas chiapanecas. La población indígena creció a un ritmo acelerado, pero posiblemente por el gran tamaño de la población indígena (el 40% en San Cristóbal y hasta el 90% en sus municipios de origen), la población urbana de San Cristóbal de las Casas (la urbe principal de la zona de conflicto) era mucho menos mestiza que la de otras ciudades, ya que los habitantes de ascendencia europea se cerraron a la posibilidad de una integración urbana de los campesinos indígenas (Speed, 2008:

66). Al mismo tiempo, muchas poblaciones indígenas ya no pudieron vivir de lo que producían en el campo por más competencia para la adquisición de tierras, las fluctuaciones de los precios del café o el maíz, o porque habían sido despojadas de sus lotes por terratenientes. Algunos de estos terratenientes formaban parte de asociaciones de ganaderos que tenían ejércitos privados llamados “guardias blancas” que reprimían a los indígenas opuestos a sus proyectos de expansión (Rus y Collier, 2003: 36-44).

Rechazados en las ciudades y despojados de sus tierras en su lugar de origen, miles de campesinos indígenas vieron en la posesión de un pedazo de tierra la manera más segura de sobrevivir estas realidades tan precarias y presionaron al gobierno a cumplir con las promesas constitucionales de la reforma agraria. El número de trabajadores de ascendencia maya había crecido de 100.000, a mediados de los setenta, a más de 200.000 en 1990, pero los empleos disponibles decrecieron de 80.000 en 1980 a menos de 15.000 en 1989, dejando a casi el 80% de la población chiapaneca maya sin trabajo (Rus y Collier, 2003: 44).

Respondiendo a estas presiones, el gobierno mexicano abrió la selva Lacandona e invitó a los campesinos indígenas a colonizar parte de la selva para formar nuevas comunidades, pero sin cualquier provisión de servicios ya que el Estado tenía muy escasa presencia en la selva. Los grupos que se lanzaron a colonizar la selva fueron los indígenas menos tradicionales y menos arraigados a sus costumbres y culturas. Una vez en la selva, aprendieron a coexistir con grupos de diferentes etnias y otras corrientes lingüísticas. Esta cooperación fue vital para la supervivencia en un ámbito tan difícil como éste (Leyva Solano, 2003: 174). Fueron los indígenas de esta zona olvidada por el Estado mexicano los que se convirtieron, en algunos casos, en la base de apoyo del EZLN.

En este contexto la religión ha desempeñado un papel fundamental a medida que se han ido desarrollando los conflictos en diferentes esferas de la vida local. En el pasado, la iglesia católica tuvo como misión “civilizar” a los indígenas y mantener la paz social, promoviendo una versión del cristianismo que recalca la importancia

de la resignación, la obediencia y la humildad (Speed, 2008: 67). Un obispo, Samuel Ruiz García, llegó a Chiapas en 1960 en una época en que se producían muchas transformaciones no sólo religiosas sino también económicas, culturales, políticas y sociales. Asistió al Concilio Vaticano II en 1964 durante el cual la Iglesia adoptó ideas asociadas a la teología de la liberación, una corriente que introduce la tesis de la lucha de clases en el discurso católico. Se justificaba así la lucha social en contra de la explotación y la opresión del pueblo humilde a manos de las élites. El obispo participó también en la conferencia de obispos que se realizó en Bogotá en 1968 donde se refinó aún más la teología de la liberación (Earle y Simonelli, 2005: 77-80).

Mientras tanto, misioneros protestantes se instalaron en zonas chiapanecas a partir de los años cincuenta. A principios de la década siguiente, estos mismos empezaron a llevarse una parte significativa de la membresía de las iglesias católicas, al ofrecer nuevas costumbres y formas de creencia que se volvieron progresivamente populares. El sistema descentralizado de los grupos protestantes significó mayor independencia religiosa en la medida en que había menos control jerárquico hacia su clerecía. La traducción de la Biblia en los idiomas de las comunidades así como la posibilidad de llegar a ser el pastor de una iglesia permitieron a los indígenas acceder a una movilidad social sin vínculo con el Estado. Los recursos materiales que el gobierno facilitó a veces a los grupos protestantes incrementaron aún más su atractivo. Adicionalmente, la influencia protestante redujo los altos niveles de alcoholismo que existían en las comunidades de la región y alentó la productividad laboral (Hernández Castillo, 2003: 65; Earle y Simonelli, 2005: 78, 175; Eber, 2003: 139-143).

Según Trejo (2010) esta competencia obligó a la iglesia católica a radicalizar su posición para poder retener a su membresía. En efecto, al llegar a Chiapas, el obispo Samuel Ruiz García adoptó una estrategia conservadora. Ahora bien, en sus visitas a los poblados, se dio cuenta de la crisis que conocía la Iglesia católica expresada en la dificultad de retener a sus miembros. El obispo obtuvo entonces el permiso del Vaticano para reestructurar las divisiones eclesiásticas y ponerse a cargo de toda la población indígena. Aunque no pudo

descentralizar a la Iglesia, inició la creación de catequistas indígenas, 400 de los cuales promovió a diáconos (Montemayor, 1997: 88), permitiendo que gozaran del mismo tipo de movilidad social que las sectas protestantes. Retrospectivamente, parece incluso que la Iglesia católica había implementado estrategias para competir con las sectas protestantes antes del obispo Ruiz García, como lo demuestra la formación de catequistas por su predecesor en 1952, por ejemplo. Pero fue indudablemente con el obispo Ruíz García que se adaptó el dispositivo de formación religiosa católica a la cultura indígena (Earle y Simonelli, 2005: 78).

Pese a la labor del obispo Ruiz García, numerosos problemas quedaron por resolverse. Al no contar con los recursos que las autoridades ofrecían a los misioneros protestantes, el obispo alentó a los indígenas a presionar al gobierno para satisfacer sus demandas. Estimuló la organización de comités y el uso del sistema legal para que los campesinos indígenas se defendieran en casos de las tomas ilegales de sus terrenos o de impuestos que no cumplían con la ley (Simonelli y Earle, 2005: 45). Los esfuerzos de Ruiz García recibieron un gran apoyo cuando el gobernador Manuel Velasco Suárez lo invitó a participar en la organización del Primer Congreso Indigenista en 1974 en el que 1.230 delegados de diversas etnias concluyeron que toda la gente maya tenía que unirse para combatir la opresión y la explotación (Simonelli y Earle, 2005: 80).

Uno de los pasos más importantes que dio la Iglesia católica en Chiapas bajo el liderazgo de Ruiz García fue la fundación del Centro de Derechos Humanos de Fray Bartolomé de las Casas que se convirtió en un centro de apoyo legal para los indígenas. Entre otros aspectos, el Centro se dedicó a defender a los indígenas, en particular en casos de violación a los derechos humanos. También coordinó el trabajo de otras organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, que se habían extendido por la región (Simonelli y Earle, 2005: 151). Aparentemente, el compromiso de la Iglesia con los indígenas se hizo casi como una “penitencia” por haberse aliado a lo largo de los siglos con las élites que habían explotado a la población (Trejo, 2010: 339).

Resulta difícil creer que el acercamiento del obispo Ruiz García a las comunidades indígenas de Chiapas se debió exclusivamente a una estrategia calculada, es decir, a consideraciones instrumentales, para retener a los fieles de la Iglesia católica. Ahora, cualquiera que haya sido el motor de sus acciones, el arzobispo obró para que las comunidades indígenas alcanzaran altos niveles de organización efectiva, los cuales fueron aprovechados posteriormente por el EZLN con propósitos distintos. Aunque muchos elementos indican que Ruiz García nunca promovió la violencia, las élites locales y estatales lo señalan con frecuencia como un enemigo ya que la teología de la liberación y las estructuras indígenas constituyeron un terreno propicio a la eclosión del zapatismo y sus simpatizantes (Speed, 2008: 75-76; desde entonces son los principales blancos de los grupos paramilitares en la región.

### **La debilidad del Estado en un entorno de fragmentación**

Otro fenómeno le permitió al obispo Ruiz García actuar de agente coordinador de entidades regionales, nacionales e internacionales en materia de defensa de los derechos humanos. Desde los años ochenta, en parte por la falta de recursos que resultó de la crisis económica de 1982 en la que se reestructuró la deuda externa del país, el Estado mexicano entró en un proceso de descentralización. Ésta fue aprovechada por comunidades indígenas que luchaban por la tierra, muchas de las cuales encontraron un gran apoyo entre las agencias promotoras de derechos humanos (Mattiace, 2003: 89-90, 154). En 1982, y de nuevo en 1988, se designaron gobernadores “de mano dura” por la guerra civil en Guatemala que tuvo múltiples implicaciones para la estabilidad regional. El general Absalón Castellanos Domínguez reprimió varias invasiones de tierras que tuvieron lugar al comienzo de su mandato, lideradas por indígenas que intentaban recuperar tierras que les habían quitado los hacendados. Su sucesor, José Patrocinio González Garrido (1988-1993), endureció las penas por crímenes “en contra de la seguridad interna” (Womack, 1999: 229) y mandó a asesinar a líderes agrarios (Speed, 2008: 101). En este contexto, el obispo concentró sus esfuerzos a favor de la defensa de los indígenas víctimas de la represión por parte del Estado y sectores de las élites locales.

Paralelamente, diversos hechos y procesos tuvieron una incidencia sobre la evolución de las circunstancias que originaron los pleitos entre diversos grupos de élites. La construcción de una carretera en 1980 facilitó el acceso a la zona a grupos religiosos, partidos políticos, activistas de izquierda, representantes de organizaciones no gubernamentales, entre otros (Earle y Simonelli, 2005: 3). La carretera hizo también posible la colonización de tierras y la emigración de los indígenas. En un plano político, las relaciones entre comunidades y/o élites correspondieron a un momento de deterioro como consecuencia de la redistribución del poder perceptible a partir de los años cincuenta y sesenta. En la época, maestros bilingües del Instituto Nacional Indigenista (INI) empezaron a ocupar puestos políticos en los gobiernos municipales, desplazando a los caciques indígenas y estableciendo cacicazgos más duros (Womack, 1999: 341). Para los años setenta, algunos se habían radicalizado y estaban apoyando a movimientos de resistencia (Eber, 2003: 136-7). De otro lado, grupos de la izquierda revolucionaria se establecieron en la zona al beneficiarse de los contactos políticos de alto nivel conseguidos por líderes locales. Así, Adolfo Orive, que procedía de una importante familia política, pudo conseguir recursos directamente del Presidente de la República Luis Echeverría, los cuales fueron desviados de programas sociales. El hecho de haber escogido a Chiapas como escenario de contestación e inversión no fue porque la zona fuera un lugar de fuerte concentración de pobreza, y mucho menos por la población indígena, ya que los marxistas veían en los indígenas un obstáculo a la revolución, sino principalmente por los contactos y los intereses personales de Orive (Montemayor, 1997: 84). Otras transformaciones significativas perceptibles en la región se explican por el contexto internacional, en particular asociados al fin de la Guerra Fría. En los años noventa, las organizaciones internacionales estuvieron privilegiando el nivel local para sus proyectos de desarrollo y labores humanitarias sin la inclusión de los gobiernos nacionales que eran considerados corruptos. Las organizaciones no gubernamentales sacaron beneficio de una nueva legitimidad y el fin de la persecución constante del Estado durante la Guerra Fría. Se establecieron entonces por lo menos catorce organizaciones independientes en pro de los derechos humanos (Olesen, 2005). Simultáneamente, aparecieron nuevos partidos políticos que fueron el producto de re-

formas diseñadas para canalizar el creciente descontento adentro y afuera del PRI en el poder. El objetivo era crear partidos débiles que daban la impresión de un pluralismo democrático de tipo electoral, pero éstos se convirtieron en un factor que dividió aún más a las comunidades y debilitó al Estado.

Los intereses de este conjunto de actores heterogéneos —a saber, las organizaciones no gubernamentales, los nuevos partidos políticos, las agencias de gobierno como el Instituto Nacional Indigenista (INI) y los grupos de activistas de izquierda— contribuyeron a la creación de nuevas organizaciones que sustituyeron a las agencias corporativistas del Estado que éste había utilizado para controlar a las poblaciones rurales. Paralelamente, el proselitismo de grupos religiosos creó antagonismos en las comunidades, desarticulando el tejido social y las estructuras de poder. La competencia entre tres grandes opciones religiosas —la tradicional católica, la corriente promovida por el obispo Ruiz García y la vertiente protestante— provocaron un debilitamiento de las instituciones que servían para mantener la unidad y los lazos comunitarios. Segmentos de la población empezaron a utilizar la conversión religiosa como una manera de librarse de los pagos anuales que se cobraban para celebraciones religiosas. También fue una forma de renunciar al sistema de “cargos” mediante el cual se determinaba la posición que el individuo tenía en la jerarquía del poder comunitario y se definía el “tequio” que imponía trabajos para la comunidad (Leyva Solano, 2003: 167).

Todos estos factores llevaron a que las poblaciones fueran un conducto ideal en el transcurso de las décadas de 1990 y 2000 para los proyectos de izquierda de grupos radicales que querían fomentar un movimiento de oposición a las élites dominantes. Dos factores adicionales, la proliferación de agencias del gobierno del Estado y la inyección de grandes cantidades de recursos, especialmente durante las administraciones del Presidente Luis Echeverría Álvarez (1970-1976) y el Presidente Carlos Salinas de Gortari (1988-1994), tuvieron efectos sobre la evolución de la situación.

La incapacidad del Estado para asumir los cambios en la región y la tendencia a ceder a las presiones de la izquierda a expensas de las élites tradicionales han precipitado hasta hoy un contra-movimiento armado. La política conciliatoria del gobierno nacional y la ausencia de una presencia efectiva del Estado (Boraz, 2007: 281) han creado las condiciones para una privatización de la violencia y una diseminación de los grupos paramilitares.

### **La vocación conciliadora de las élites nacionales**

Aunque muchos analistas ven en los ataques paramilitares una estrategia del gobierno nacional (Lofving, 2004; Moksnes, 2004; Norget, 2005; Olesen, 2005; Stahler-Sholk 1998), es difícil afirmar que éste haya sido el gran protagonista de las repetidas acciones violentas contra las poblaciones a lo largo de los últimos años. En primer lugar, el fin de la Guerra Fría ha anclado la democracia en su acepción liberal (Olesen, 2005: 165), la cual implica en particular el respeto a los derechos humanos, un principio rector o una dimensión a tener en cuenta para los gobernantes. Se subrayará al respecto que la democracia liberal se legitima a través de su promoción de los derechos individuales, aún en contra de las mayorías que son vistas como tan o más peligrosas que los tiranos más abusivos, mientras que la democracia radical o revolucionaria promueve los derechos colectivos y sostiene que sólo la democracia mayoritaria es legítima, convirtiéndose en una visión plebiscitaria de la democracia. A pesar de la proliferación de adjetivos que se usan para calificar la democracia, estas dos visiones concuerdan, por lo menos a grandes rasgos, con la tipología elaborada por el politólogo Robert Dahl (1956, 4-62) cuando marcó la diferencia entre la democracia tipo “*Madisonian*” (derivada del pensamiento de James Madison) y la populista (asociada con el pensamiento de Rousseau y Jefferson). En el primer caso se exigen límites al poder del gobierno, mientras que en el segundo, la mayoría puede imponer su voluntad, poniendo en riesgo la libertad de grupos minoritarios y requiriendo una fe absoluta en la buena voluntad de un gobierno que puede movilizar a las mayorías. En sociedades con altos niveles de subdesarrollo, la democracia populista o radical (el cambio de nombre se debe a su asociación en el caso de América Latina con gobiernos y movimientos que usan la retórica de la revolución para justificar la

concentración del poder en los representantes de la mayoría), puede a veces llevar a la manipulación de las mayorías por una minoría que puede ceder a tentaciones autoritarias.

Por lo tanto, las élites nacionales son *a priori* las primeras interesadas en una solución negociada a los conflictos porque la visión individualista de la democracia liberal se deslegitima más fácilmente con violaciones a los derechos humanos que la de la democracia radical o revolucionaria que puede justificar acciones en contra de individuos como un mal necesario para proteger a las mayorías. Además de este aspecto ideológico, muy apremiante en una democracia joven como la de México, las diferencias entre las mentalidades urbanas y las rurales también tienden a resultar en estrategias nacionales que favorecen la negociación. La vida urbana exige que el individuo acepte límites a su libertad a cambio de un sistema de reglas que el Estado puede hacer valer. En las zonas rurales mexicanas, por motivos geográficos, económicos, históricos, y socio-políticos, el gobierno nacional no puede hacer valer sus leyes y hay imperios de caciques o jefes regionales que están por fuera de la ley.

Por consiguiente, el control político en un medio urbano se ejerce de una manera muy distinta a su contraparte en un medio rural. En muchas zonas rurales hay estructuras de poder autoritarias y cerradas con poca transparencia y sin muchos contrapesos al poder de los que sostienen el control<sup>2</sup>. La falta del imperio de la ley en zonas rurales parece ser más una función del nivel de desarrollo y no de la falta de buenas leyes o ni siquiera de buenos gobiernos. El politólogo Samuel Huntington (1968) sostuvo que el respeto a la ley estaba asociado a los ingresos per cápita del país, sugiriendo que, sin tener una clase media que podía vigilar a la clase política y hacer valer leyes de transparencia o someter a las autoridades a la ley, el Estado de derecho no podía funcionar.

---

<sup>2</sup> Hoy en día se está tratando de demostrar lo contrario en lugares tan diversos como Iraq, Afganistán y Colombia, pero hasta el momento parece estar surgiendo lo mismo que en Chiapas: el reestablecimiento de los caciques, unos de los principales actores que dan la sensación de poder devolver la paz social en un momento determinado en un ambiente conflictivo.

Como resultado, la violencia tiende a ser una realidad cotidiana en estas zonas ya que no hay imperio de la ley —cualquier contrato que se rompe solo encuentra solución en la violencia (como en el caso de actividades ilícitas como el narcotráfico). Las leyes y las instituciones son a menudo herramientas al servicio de los sectores más poderosos. La única manera de conseguir algo que no es la voluntad del cacique de la zona es mediante la violencia. Por eso, el gobernador Ulises Ruiz desafió a los oaxaqueños y también a las élites nacionales cuando parecía que el Estado quería que el presidente Vicente Fox (2000-2006) y luego Felipe Calderón (2006-2012) lo destituyeran. Dijo: “a un gobernador sólo lo quita Dios” (Díaz, 2010). Sabía que, en esta región rural, el Estado no tenía un fuerte control socio-espacial y mantuvo su actitud desafiante después del ataque de la UBISORT con la que se abrió el presente relato.

La violencia, sin embargo, no es inevitable. Estos lugares se mantienen tranquilos con base en los “arreglos” entre los grupos más poderosos. La tranquilidad de una zona rural tiende a variar según el nivel de autoritarismo. Muchos pueblos de Sinaloa, por ejemplo, son sumamente tranquilos porque son controlados por poderosos narcotraficantes. En las zonas indígenas, los caciques exigen la “unidad” —se expulsa a cualquier individuo o grupo que quiere más independencia. La tranquilidad también puede ser impuesta a través de la represión del Estado. El proceso de modernización debilita al sistema autoritario abriéndoles oportunidades a otros actores políticos pero no es la ley por sí sola la que les devuelve la tranquilidad a las comunidades en zonas rurales.

En suma, para las élites nacionales, el conflicto no tiene que ser de suma cero: debe de haber alguna manera de negociar un acuerdo que satisfaga a ambos lados, como se supone en un sistema donde impera la ley. Por lo tanto, no sorprende que el presidente Vicente Fox dijera que resolvería el problema de Chiapas “en quince minutos” o que su predecesor Ernesto Zedillo (1994-2000) apoyara los acuerdos de San Andrés Larráinzar y sólo después de asesoramiento retirara su apoyo (Mattiace, 2003: 125). Ernesto Zedillo también anunció en 1995 que pronto capturaría al comandante Marcos, pensando que hacer

cumplir las leyes en la selva Lacandona era tan fácil como proponérselo. Claramente no tomó en cuenta la magnitud de la debilidad casi total del Estado en esta zona de Chiapas. Tampoco fue plenamente consciente de que la poca presencia que el Estado tenía le servía más bien para desestabilizarlo. Por lo mismo, los presidentes Luis Echeverría (1970-1976), José López Portillo (1976-1982) y Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) parecieron haber creído que al permitirles el acceso al poder a los grupos radicales, éstos se unirían al gobierno y perseguirían sus metas políticas y sociales sólo adentro del sistema. Al mismo tiempo, la guerra sucia en contra de los grupos violentos de izquierda se agudizó durante las presidencias de Luis Echeverría y José López Portillo, sugiriendo que los mandatarios tenían políticas que justificaban “todas las formas de lucha” como era el caso de las franjas más radicales de la izquierda o que les daban a las fuerzas castrenses un margen de maniobra para estabilizar el país, sin necesariamente asumir y justificar los actos que tomaron lugar. En todo caso, las élites estatales rurales no tenían políticas tan conciliatorias como las élites nacionales de la ciudad de México, como se verá más adelante.

### **El efecto Tlatelolco y la “colonización” del INI**

Además de una predisposición por llegar a un acuerdo, el “efecto Tlatelolco” también influyó en la predisposición que tuvieron las autoridades nacionales por encontrar soluciones negociadas. La masacre de Tlatelolco de 1968 horrorizó de tal manera a la sociedad mexicana que causó que la legitimidad del régimen del PRI-Estado se desplomara. El 2 de octubre de 1968 el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970) permitió que los militares, bajo el mando de su secretario de gobernación y próximo presidente, Luis Echeverría, abriera fuego sobre una asamblea de alumnos que se proclamaron socialistas pero pedían simplemente la democracia, matando a decenas de jóvenes. Desde los acontecimientos, sentimientos de culpa y tristeza han envuelto a la sociedad, incluyendo a las más altas esferas de las élites y algunos mandos militares (Clarke, 1997: 271). El costo político de ese evento nunca se ha olvidado.

En parte por esta razón, al llegar a la Presidencia después de haber ordenado la matanza de los estudiantes en la Plaza de Tlatelolco, el

presidente Luis Echeverría se dedicó sobremanera a cooptar a la izquierda y lograr que se uniera al gobierno. Nunca se había invertido tanto en los proyectos de izquierda ni se había invitado a tantos miembros de la izquierda a formar parte del poder. Pensando, quizás, que Tlatelolco hubiese convencido a los jóvenes con aspiraciones revolucionarias que toda lucha por el cambio tenía que llevarse a cabo adentro del sistema (Collier, 1994: 68), el mandatario invitó a jóvenes, convencidos de que sólo a través de la revolución había cambio, a integrarse al sistema.

Muchos de la “generación del 68” terminaron ocupando puestos de alto nivel en los estados del sur, como Chiapas, Yucatán y Tabasco. Pensando posiblemente que con la afluencia de dinero se resolvería la situación, Luis Echeverría realizó grandes inversiones en programas para combatir la pobreza. Una proporción significativa de los fondos destinados a programas en el sur del país fueron aprovechados por el EZLN y grupos que lo antecedieron en todo el país, como los maoístas de Política Popular, liderados por Adolfo Orive (Collier, 1994: 77). Este último recibió fondos de Echeverría a través del rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Montemayor, 1997: 74). Mientras tanto, la hermana de uno de los fundadores del EZLN fue diputada del PRI y esposa de un asesor del entonces gobernador de Puebla, Manuel Bartlett (Henck, 2007: 17), con lo que se sugiere un nivel de acceso estratégico para un grupo guerrillero.

Una de las agencias más beneficiadas por las políticas de Echeverría fue el ya mencionado Instituto Nacional Indigenista (INI). El presupuesto del INI aumentó de 26 millones de pesos mexicanos en 1970, a 450 millones en 1976 (Mattiace, 2003: 62). El INI había empezado en los años cincuenta como una agencia que serviría para integrar a las poblaciones indígenas a la nación. Formaba parte de una política prioritaria de la administración de Echeverría para reemplazar a los caciques y los hombres de poder local y regional con representantes de la burocracia del gobierno nacional, estableciendo un control más directo del Estado sobre estas zonas. Se esperaba que este control fuese efectivo a través de la extensión de la red de agencias estatales que se insertaban en una burocracia tentacular. En el fondo, la estra-

tegia implementada era el producto de la predisposición que tenía Echeverría por la cooptación y su capacidad para pedir prestado al sistema bancario internacional los fondos necesarios para alimentar la burocracia ya que la economía productiva doméstica jamás hubiese podido costearla.

Al dejar que miembros de la “generación del 68” pudiesen influir en entidades como el INI, en vez de establecer un mayor control político propio, Luis Echeverría consiguió resultados contrarios a lo esperado: debilitó el control del Estado y fortaleció a las disidencias. Muchos individuos utilizaron al INI y otras agencias gubernamentales en el sur del país para formar organizaciones opuestas al gobierno que podrían ser utilizadas como bases de apoyo para fomentar un proyecto alternativo de Estado (Eber, 2003: 136-7; Mattiace, 2003: 61-67).

Un componente clave de esta estrategia fue cambiar la ideología que caracterizaba la estrategia del INI. Históricamente, su concepto obedecía a la idea que había desarrollado el célebre José Vasconcelos en su obra *La Raza Cósmica* en la que argumentaba que el mestizaje era una de las herencias más ricas de México y que la mezcla de las razas daba lugar a la creación de una raza nacional que superaba los defectos al que son proclives las razas puras. El INI promovía el mestizaje para lograr que las comunidades indígenas se integraran al resto del país. Lo anterior suponía no sólo aceptar y participar en el Estado sino también desligarse de sus comunidades, aprender el español y añadir su sangre a la gran mezcla nacional, sin que las comunidades preservaran intactas sus lenguas y costumbres. Es más, a pesar de que las tradiciones indígenas se apreciaban como algo que enriquecía a la raza mestiza, éstas se veían también como obstáculos a la integración y la modernidad del país (Mattiace, 2003: 59).

Ahora bien, surgió en la época una corriente intelectual en contra de las estrategias integracionistas del INI. Los antropólogos que más querían reemplazar la estrategia con una que promoviera el rescate cultural de las poblaciones indígenas fueron invitados a integrar al gobierno del sucesor del presidente Luis Echeverría, José López Portillo (Hernández Castillo, 2003: 68; Mattiace, 2003: 66). Por lo tanto,

con o sin el visto bueno del Estado, desde fines de los años sesenta, el INI ya no promovió la integración de las poblaciones indígenas al resto del país, sino que se dedicó a deshacer todo el trabajo que había hecho el Estado hasta entonces para propiciar la integración. Las élites políticas, con la ayuda de la Iglesia, habían creado municipios que se convirtieron en referentes primarios de identidad sobre todo porque se canalizaban fondos a través de ellos. Cada uno tenía su virgen, cuya imagen formaba el centro de atención en las fiestas religiosas que se celebraban anualmente, fomentando comunidad adentro del municipio y competencia entre los municipios (Collier 1994: 36). En las zonas de influencia de Lázaro Cárdenas, gran héroe revolucionario quién logró un control político particularmente efectivo del campo mexicano mediante la creación de cooperativas agrarias o ejidos que dependían directamente del Estado, los municipios fueron los escenarios de lealtades renovadas (Speed, 2008: 97).

Las divisiones políticas y las prácticas religiosas habían logrado que las comunidades indígenas se identificaran con sus municipios (o a veces con sus ejidos) y no con sus etnias o sus corrientes lingüísticas. En muchos pueblos indígenas, poco a poco las lenguas indígenas estaban entrando en desuso (Earle y Simonelli, 2005: 38). Pero cuando los activistas de izquierda tomaron el control del INI, la filosofía cambió y se promovieron actividades de rescate cultural. Los activistas de izquierda alcanzaron a persuadir a los presidentes en turno de modificar sus políticas. Las administraciones de Echeverría, López Portillo, De la Madrid y Salinas de Gortari sabían que con más presencia de representantes estatales, sin importar los tintes ideológicos de éstas, se empezarían a debilitar los cacicazgos rurales. También parecen haber pensado que al otorgar espacios culturales a los indígenas, éstos estarían más dispuestos a insertarse en mayor medida en la economía y la política. Sin embargo, desde el comienzo de este viraje ideológico, los representantes del INI privilegiaron una politización y una radicalización de las actividades culturales locales. A partir de programas de danza y teatro, se desarrolló una cultura de izquierda radical que fundió la resistencia tradicional al dominio de los blancos, o *kaxlanes*, en consonancia con el concepto revolucionario de lucha de clases exaltado por grupos de izquierda que formaron parte de los

proyectos en la región (Hernández Castillo, 2003: 76; Leyva Solano, 2003: 176; Mattiace, 2003: 73; Speed, 2008: 49; Rus, 2003: 29).

### **El arcoíris ideológico de Carlos Salinas de Gortari y su batalla contra el PRI**

Uno de los presidentes que apoyó la nueva filosofía del INI fue Carlos Salinas de Gortari, interesado en lograr la integración del país como parte de su proyecto de modernización. En parte, este apoyo tuvo que ver con la presencia en su grupo político de líderes de la izquierda radical. Adolfo Orive había sido uno de sus profesores en la universidad. Tanto el Presidente como su hermano Raúl tenían lazos con partidarios maoístas y otros grupos de izquierda (Womack, 1999: 176). Brigadistas de la izquierda radical afirmaron incluso que Raúl los apoyó financieramente en sus actividades a fines de los años setenta (Montemayor, 1997: 8). Existía entonces una fluidez que hacía difícil la distinción entre los defensores del sistema político y los oponentes que querían desestabilizarlo (Olney, 2004: 5-6).

En sustancia, el Presidente actuó con la ambición de adelantar un proyecto modernizador de la sociedad. Pese a un manejo considerado como hábil de la política, la inestabilidad que caracterizó el fin de su mandato se puede entender como una consecuencia de sus acciones destinadas en parte a dismantelar al PRI y la clase política tradicional. Adicionalmente, su mandato fue perturbado por varios hechos violentos notorios como la aparición de la lucha guerrillera del EZLN y los magnicidios del pre-candidato presidencial que él mismo había escogido para su sucesión, Luis Donaldo Colosio y el líder del PRI, José Francisco Ruiz Massieu (marzo y septiembre de 1994, respectivamente).

Carlos Salinas de Gortari aprobaba la orientación multiculturalista del nuevo indigenismo del INI porque podría debilitar el control de las élites locales y permitir que el gobierno nacional tuviera una relación directa con las organizaciones independientes (Speed, 2008: 52). Uno de los grandes proyectos del Presidente fue reemplazar la antigua estructura de control político a través de organizaciones sectoriales de corte corporativista como la Confederación Nacional

Campesina (CNC), la Central de Trabajadores Mexicanos (CTM) y la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) por organizaciones territoriales como el Movimiento Territorial (MT) que abrían la posibilidad de un control local más directo del Estado. Asimismo, el mandatario quería cambiar la cultura política que había caracterizado a la mayoría de las regiones históricamente marcadas por mecanismos de dependencia y situaciones de aislamiento de las poblaciones (Mattiace, 2003: 75).

Convencido de que la modernización de México requeriría de altos niveles de crecimiento económico que sólo se podían lograr si la población tomaba responsabilidad de su bienestar, el Presidente implementó una estrategia que afectaba directamente al PRI y beneficiaba a las élites dispuestas a sacrificar al PRI “revolucionario” como había existido hasta entonces y reemplazarlo por un PRI dispuesto a competir por los votos, cómo los partidos en democracias modernas, rompiendo con el legado del pasado. Su programa para combatir la pobreza, Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), procuraba establecer un nexo directo con la sociedad que no implicaba lidiar con las múltiples capas de burocracia inherentes al septuagenario PRI-gobierno (Mattiace, 2003: 75; Rus, 2003: 19)<sup>3</sup>. En vez de luchar contra la pobreza con subsidios, se combatiría alentando a los pobres a ser emprendedores y darles solución a sus problemas con asistencia federal que favorecía las propuestas más eficientes y productivas.

Sin embargo, como el poder central no tenía un control suficiente sobre la implementación del programa en estados rurales como Chiapas, la iniciativa del Presidente fortaleció a los miembros del antiguo sistema. Los gobernadores y los caciques se apropiaron de los fondos para sus propios fines y crearon dependencias aún más fuertes entre sus clientelas y las corporaciones que manejaban, al condicionar los fondos financieros al apoyo del PRI (Rus, 2003: 48).

---

<sup>3</sup> El programa consistía en facilitar préstamos a comunidades que se organizaban en torno a propuestas como extender una red de agua potable o pavimentar las vías principales de las cabeceras municipales. La comunidad y el gobierno municipal tenían que proveer un tercio de los fondos, contribuyendo con mano de obra gratuita, por ejemplo. Se esperaba que surgieran nuevos liderazgos y fomentara una economía productiva desde sus raíces locales.

Al mismo tiempo, en otros lugares, el plan presidencial fue utilizado por sectores de oposición que se habían metido en el sistema para financiar proyectos radicales y consolidar a grupos independientes que se oponían al gobierno estatal y nacional. Carlos Salinas de Gortari apoyaba la proliferación de organizaciones independientes en zonas indígenas ante todo porque pensaba que permitiría más altos niveles de productividad. Según él, así se podría alentar y respaldar a los grupos más productivos, facilitando el desarrollo del país (Mattiace, 2003: 76-7), pero los fondos y los destinatarios de la ayuda fueron acaparados por élites de izquierda y derecha que se disputaban el poder a nivel local, ambas en contra del gobierno nacional.

Lejos de olvidar a los indígenas, como muchos pensaron cuando el EZLN le declaró la guerra al Estado el mismo día que entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, Estados Unidos y Canadá (1 de enero de 1994), Carlos Salinas de Gortari había invertido más del 50% de su presupuesto anual en inversiones sociales con una atención particular a la lucha contra la pobreza en Chiapas. El ocho por ciento de los comités de solidaridad se establecieron en Chiapas, a pesar de ser sólo una de las 32 entidades federativas del país. Casi 14 millones de campesinos indígenas lograron acceder a agua potable por primera vez gracias a los esfuerzos impulsados desde la Presidencia –y hasta sus críticos admitieron que los resultados en Chiapas fueron significativos (Womack, 1999: 211).

No obstante, el mandatario tuvo un control precario sobre la implementación de su programa en Chiapas (entre otros aspectos, el gobernador Patrocinio González usó los fondos para fortalecer al PRI). Además, subestimó el impacto de otras políticas y la coyuntura sobre las comunidades. La eliminación del programa de subsidios a la industria cafetera, al Instituto Mexicano del Café (INMECAFE) y los cambios al artículo 27 de la Constitución que dieron fin a la reforma agraria provocaron el desplome de los ingresos de los indígenas en la zona cafetera y arruinaron las esperanzas creadas por la lucha permanente por la tierra que era parte de la vida cotidiana de la población chiapaneca. Entre 1989 y 1993 los ingresos de los pequeños productores se redujeron en un 70% (Mattiace, 2003: 79-80).

Ahora bien, sería simplista avanzar que la pobreza y las fluctuaciones socio-económicas explican por sí solas la agravación de la violencia en Chiapas, perceptible ya en esos años. La situación se debe ante todo a la contienda entre tres principales grupos de élites –la clase tradicional de Chiapas, la izquierda nacional y las corrientes reformistas nacionales– en pugna por el control de las zonas indígenas en un contexto (inter)nacional de liberalización.

### **La integración regional y el descuido de la seguridad nacional**

Entre 1989 y 1995, aproximadamente, se percibió en el escenario internacional una euforia colectiva en los Estados Unidos y sus aliados de la Guerra Fría por el derrumbe de la Unión Soviética y lo que se veía como la deslegitimación definitiva del comunismo (Fukuyama, 1989). En este ambiente optimista en el que se pensaba que la filosofía del liberalismo sería adoptada como el único trasfondo ideológico compatible con el éxito de cualquier país, se formuló un proyecto de integración regional de las Américas que competiría económicamente con la Unión Europea y la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ASEAN) ya que se creía que la competencia entre los países desarrollados pasaría del campo militar al ámbito económico (Aggarwal, 1993; Hyland, 1993; Sekwat y Lynch, 1995). El libre comercio fue proclamado como el instrumento mediante el cual todos los países podían alcanzar sus más altos niveles de productividad y desarrollo. Por lo tanto, debería beneficiarse a todos, a pesar de que los agentes de las industrias menos productivas fueran sacrificados. Para México, la integración regional también ofrecía contrapesos al poder de las élites tradicionales, poniéndole “candados” a las reformas de Carlos Salinas de Gortari y permitiendo la continuidad de sus programas independientemente de su sucesor en la Presidencia. Por último, se suponía que el libre comercio aceleraría el proceso de modernización del país. Conlleva sobre todo una armonización de los sistemas legales y cambios institucionales en ruptura con el pasado, los cuales responderían a criterios técnicos, y menos de naturaleza política-clientelista, que a su vez conducirían a la profesionalización de los aparatos estatales.

El proyecto de integración regional, cuyo primer paso consistía en la integración económica promovida por el TLC, era tan importante para las administraciones de los presidentes Carlos Salinas de Gortari y Bill Clinton que los dos mandatarios hicieron caso omiso de las noticias preocupantes emitidas por sus órganos de alerta y seguridad. Los militares y el sistema de inteligencia en México, al igual que organizaciones ganaderas y miembros de la Iglesia, habían avisado al Presidente sobre las actividades guerrilleras en Chiapas desde 1993. Pero la prioridad (compartida por el presidente estadounidense) era evitar que saliera a la luz pública cualquier noticia que ponía en peligro la aprobación del TLC en el Congreso de los Estados Unidos (Wager y Schulz, 1995: 16-17).

Las políticas de los presidentes Salinas, Zedillo y Fox demuestran que promovieron un repliegue del Estado en nombre de la modernidad que fue aprovechada por los grupos menos interesados en promoverla. A pesar de que Carlos Salinas de Gortari quería desplazar a las élites tradicionales del PRI, parece haber estado lo suficientemente preocupado sobre la seguridad interna del sur del país como para nombrar al antes mencionado gobernador, Patrocinio González Garrido, su Secretario de Gobernación en 1993 después de un viaje por Chiapas. Pero el estallido de la rebelión zapatista dio lugar al despido inmediato del mismo gobernador. La rebelión logró sorprender al gobierno y tuvo el efecto que el llamado “comandante Marcos” había esperado. Al actuar inicialmente en San Cristóbal de las Casas, donde organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras habían estado estableciéndose a lo largo de casi una década, y con el mayor escrutinio producto del TLC, el movimiento insurgente fue mediatizado por una red internacional globalizada que ningún gobierno pudo erradicar (Olesen, 2005: 135). Aunque las fuerzas castrenses hicieron retroceder al EZLN en pocos días, se publicaron fotografías de la represión militar que provocaron tanta conmoción que el gobierno declaró un cese al fuego unilateral y llamó a negociaciones de paz (Wager y Schulz, 1995: 16), otorgándoles amnistía a más de 100 prisioneros políticos (Collier, 1994: 140). El “comandante Marcos” se mostró renuente a aceptar las condiciones que le ofreció el Estado en particular para combatir la pobreza indígena ya que sus

objetivos eran de mayor alcance y no conciliables con las propuestas del Presidente (Womack 1999: 279).

El Presidente tuvo que lidiar con la breve fase militar de la estrategia zapatista, pero fue a su sucesor, Ernesto Zedillo, a quien le correspondió cosechar las semillas que se habían sembrado desde los años sesenta en un contexto de creciente debilitamiento del PRI. La política de Zedillo fue errática oscilando constantemente entre la conciliación y la “mano dura”<sup>4</sup>. La torpeza de la reacción de ambos presidentes contribuyó a los denominados “errores de diciembre” que precipitaron una crisis económica. Ernesto Zedillo se encontró a la defensiva y extendió la invitación a Marcos para entrar en negociaciones. Este último tenía dos demandas previas a cualquier conversación: que el Ejército se retirara de la zona y que el arzobispo Samuel Ruiz fuera el mediador. Las dos peticiones se cumplieron dando pie a negociaciones que culminaron en los acuerdos de San Andrés de Larráinzar (y a una supuesta negociación secreta entre el mandatario y el “comandante Marcos” que fueron desviadas por su Secretario de Gobierno, Emilio Chuayffet) (Stahler-Sholk, 1998: 66).

### **La gestación de los grupos paramilitares**

Fue en este ambiente que se inició la formación de la mayoría de los grupos paramilitares en la región. Los militares, acusados de ser exclusivamente represivos, se sintieron frustrados y traicionados al tener que afrontar los efectos de varias décadas de vicisitudes políticas. Apoyaron a las administraciones de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo en momentos en que éstos tuvieron muy bajos niveles de legitimidad. Pero ambos les dieron la espalda y no se arriesgaron a defender a sus cuerpos castrenses en contra de las acusaciones que se multiplicaron después de los operativos armados. Además, desde 1982, la Presidencia perdió poder puesto que los tecnócratas no tenían la base de apoyo con la que contaban los grupos populistas (“revolucionarios” o “dinosaurios” según el lenguaje común) del PRI ni el

<sup>4</sup> Empezó por apoyar las negociaciones de paz pero dio un vuelco cuando declaró que el Ejército iría a la selva chiapaneca a encontrar y detener a Marcos, o el “desenmascarado” Rafael Sebastián Guillén Vicente. Como era de esperarse, al llegar el Ejército al cuartel de Marcos, éste había abandonado el sitio y el gobierno se volvió una vez más el blanco de críticas.

acceso a los fondos ilimitados y discrecionales que requería la gran maquinaria del PRI-gobierno. Como consecuencia de la debilitación de la Presidencia, las fuerzas castrenses y las élites locales activas en Chiapas aparecieron cada día más independientes del gobierno nacional que no quería plenamente enfrentar la situación o que posiblemente no tenía los medios para hacerlo (Mattiace, 2003: 127; Stahler-Sholk, 1998: 64).

Adicionalmente a los militares, miembros procedentes de otros sectores haciendo presencia en Chiapas, a saber, los círculos de la administración estatal, los grupos afiliados al PRI y las élites políticas y económicas, se sintieron defraudados por el gobierno nacional. Para muchos de ellos, había desaparecido la ley y ahora imperaba la impunidad por la actividad de grupos de izquierda que representaban una fuente de desórdenes. Asimismo, sentían que el poder central había renunciado a sus prerrogativas y sus responsabilidades, amenazando la integridad del país.

No faltaban las motivaciones para actuar ante la situación. Pero cada protagonista de la esfera local tenía su propia agenda. Más allá de las diferencias, existía consenso para argumentar que los actores externos a la región se encontraban en la raíz del problema al difundir ideas desestabilizadoras como el respeto a los derechos humanos, la autonomía de las comunidades y la necesidad de rescate cultural indígena. Detrás de estas reivindicaciones se escondía el discurso de la lucha de clases propia a una amenaza heredada del pasado, el comunismo.

Por consiguiente, los actores locales mencionados estaban dispuestos a expulsar a los agentes externos y quebrar la infraestructura organizativa y el proyecto alternativo del zapatismo. Todos, menos posiblemente algunos representantes del PRI indígenas, calificaron de actos criminales las tomas violentas de las tierras de los rancheros por parte de las comunidades. La actitud pasiva o conciliatoria del gobierno nacional ante los hechos fue percibida como una muestra de injusticia y debilidad peligrosa.

Los altos mandos militares y varios notables políticos vieron en el zapatismo una amenaza seria a la soberanía nacional (Stahler-Sholk, 1998: 70)<sup>5</sup>. De allí el anhelo de poner en práctica una estrategia de contrainsurgencia multidimensional con componentes de índole militar, psicológica, política y socio-económica, la cual pasaba por el apoyo de los campesinos indígenas. Los demás actores, incluso no nacionales, tenían propósitos más limitados. El gobierno de Bill Clinton quería que el Estado mexicano lograra estabilizar a Chiapas principalmente para poder proyectar una imagen que les daría confianza a los inversionistas. También se esperaba avanzar hacia el proyecto de integración regional, suministrándole al país mayor asistencia militar (Norget, 2005: 130). Por estos motivos, en un contexto de democratización, era importante que los militares mexicanos mantuvieran una imagen “limpia”, aún más cuando el Presidente gozaba de una escasa legitimidad popular, que implicaba la elaboración de una estrategia militar no exclusivamente represiva, mientras que los Estados Unidos insistían ante la opinión en la importancia de una cooperación militar indirecta.

En la órbita local, la legitimidad de las élites estatales dependía en gran medida de su capacidad de resistencia y demostración de fuerza frente al poder centralizador. Un motivo de preocupación y debilitamiento era precisamente implementar las órdenes conciliatorias de Ernesto Zedillo. Es más, el PRI de Chiapas era, en muchos aspectos, el brazo revolucionario del partido y tenía motivos para poner en su lugar a los “tecnócratas” como el Presidente. Los integrantes indígenas de los grupos priístas locales querían cobrar los sueldos que se ofrecían, demostrar un apoyo incondicional a los patrones, recobrar el poder político, saciar una sed de venganza y desahogar frustraciones después de décadas de tensiones en la región.

En estas condiciones, han surgido desde la época diversas organizaciones paramilitares. Algunas de ellas se inscriben en las teorías clásicas

---

<sup>5</sup> La amenaza no provenía de la capacidad militar del movimiento derrotado por las armas. Lo que preocupaba eran los altos niveles de legitimidad del zapatismo y su manera tan efectiva de aprovechar el desprestigio del Estado. La legitimidad de los zapatistas en zonas indígenas estaban debilitando el tenue control que tenía el Estado sobre el territorio.

de las guerras de “baja intensidad”, que contemplan con frecuencia su empleo, cuyo propósito es ganarse el apoyo del pueblo, incluso mediante la coerción (Hippler, 2006: 16-23; Manwaring, 2004: 3). Los paramilitares han sido hasta hoy principalmente armados, entrenados y protegidos por grupos externos a la región chiapaneca (García, 2003:91), a veces por el gobierno estatal, grupos priístas locales y miembros de la fuerza pública (Tello, 1998: 6).

Durante la fase de expansión del zapatismo, los paramilitares tuvieron como misión separar a los activistas nacionales y extranjeros de sus bases de apoyo indígenas (a veces perpetrando atentados selectivos) y obligar a los integrantes de las comunidades indígenas a depender exclusivamente del Estado para la satisfacción de sus necesidades materiales<sup>6</sup>. El fenómeno paramilitar se concentró entonces en zonas donde existían territorios declarados autónomos que competían directamente con los caciques locales por el control del territorio y podían servir de bases de apoyo para grupos que querían desestabilizar a las élites predominantes. Otras de las metas del paramilitarismo fue destruir el nivel de organización que permitía que decenas de comunidades se expresaran con una sola voz, así como dismantelar los proyectos económicos que financiaban y legitimaban sus actividades (Stahler-Sholk, 1998: 72).

Por último, la formación de las organizaciones paramilitares obligó a cada poblado a dedicarse a sus propios problemas, canalizando las energías y dividiendo los movimientos sociales (Hernández Castillo 2003: 79). En complemento, los paramilitares tenían el propósito de intimidar a la población para que no se atreviera a respaldar a agentes externos. Al reclutar a indígenas de las mismas comunidades, se aseguraban ante todo que los habitantes no se unieran alrededor del proyecto zapatista. Al mismo tiempo, era una táctica para que los paramilitares pudieran reconocer a los auxiliares de la rebelión zapatista (Lyall, 2010). Se generó así un ambiente de violencia intracomunitaria

---

<sup>6</sup> La estrategia parte del postulado de que demandas de autonomía, respeto a los derechos humanos y otros conceptos considerados como abstractos son metas de agentes externos perturbadores, mientras que los indígenas tienen objetivos más concretos y limitados: alimentos, un lote de tierra, acceso a agua potable, etc.

que justificó la presencia de agentes del Estado para mantener la paz (Speed 2006: 173). Es decir que policías y soldados aprovecharon la coyuntura para poder recuperar la autoridad y la legitimidad del Estado al aparecer como protectores y dadores de despensas.

## **Radiografía de los grupos paramilitares**

Los primeros grupos paramilitares se crearon aún antes de que estallara la rebelión zapatista. Su aparición demostró la falta de confianza que tenían las élites estatales de Chiapas en el gobierno federal y el hecho de que las actividades de los grupos guerrilleros no eran ningún secreto para las élites locales. Antes de ser gobernador, González Garrido había estado librando su propia “guerra de baja intensidad” en Chiapas desde la época de su predecesor, el general Absalón Castellanos (1982-1988). Su actividad más maquiavélica parece haber sido el establecimiento de un ejido, el Tomás Munzer, en medio de la zona donde las organizaciones de la izquierda radical estaban conformando bases de apoyo cuando recién había empezado el proyecto revolucionario. El gobernador regaló terreno a unos indios tzetzales afiliados a la corporación sectorial del PRI. Igualmente, hizo entrega de armas para que se “defendieran” de las organizaciones independientes que estaban invadiendo terrenos en la zona. Se habían incorporado ex policías y soldados al ejido y empezaron a montar operativos en contra de la izquierda a partir de 1985. Los indígenas que se integraron al municipio se convirtieron en paramilitares “de facto” —como dijo uno: “nos sentimos como caballos en potrero porque no tuvimos ni para dónde correr...” (Montemayor, 1997: 26-29)<sup>7</sup>.

Los primeros ataques y bloqueos se registraron en la primavera de 1995 y demuestran las hondas raíces locales y el carácter idiosincrático de los grupos. Uno de los actos más contundentes tuvo lugar cuando

---

<sup>7</sup> Mientras tanto, tres meses antes del estallido de la rebelión zapatista, en octubre de 1994, surgieron rumores en el municipio de Chamula de que las élites locales del PRI estaban usando los fondos municipales para comprar armas y municiones y que habrían pagado a unos 100 hombres la suma de \$1.000 dólares cada uno para constituir un ejército privado del PRI local. Ya en los primeros meses de 1995 en localidades de la zona del conflicto había una gran cantidad de armas en manos de civiles que aparentemente fueron distribuidas por los grupos locales del PRI (Rus y Collier, 2003: 54).

el ejército priísta de Chamula atacó a un grupo de evangelistas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quienes también se habían armado. En esta ocasión, se contabilizaron 28 muertos que se atribuyeron a conflictos intracomunitarios. Por lo tanto, no todos los grupos anti-zapatistas fueron formados por grupos priístas<sup>8</sup>.

Ahora bien, la mayoría de los grupos se formaron entre 1994 y 1995 en Chiapas, Guerrero y Oaxaca donde el zapatismo había impactado a las comunidades indígenas y áreas en las cuales existían movimientos que se proponían establecer territorios autónomos. En Chiapas se estima que había en 1997 entre veinte y veinticinco grupos paramilitares (Speed, 2008: 22). La mayoría de los grupos estuvieron integrados por indígenas ligados al PRI en zonas donde los zapatistas los habían desplazado del poder (Speed, 2008: 69). Muchos parecían haber recibido recursos de las élites estatales priístas (Speed, 2008: 107) aunque los ataques fueron probablemente planeados a nivel local a veces con la ayuda de policías o miembros de las fuerzas militares (Womack, 1999: 144).

El grupo que representa el prototipo del paramilitarismo como estrategia de Estado fue un grupo al cual se le atribuyen muchas víctimas, aunque no fue asociado con masacres, sugiriendo que influyeron élites preocupadas por no atraer la atención y perjudicar la imagen del Estado. El grupo, “Desarrollo, Paz y Justicia”, o Paz y Justicia<sup>9</sup>, fue formado en febrero de 1995 justo cuando se ordenó el repliegue militar y se estableció la política del diálogo con los zapatistas. Fue originalmente registrado como una organización sin fines de lucro, situación que le permitió acceder legalmente a fondos gubernamentales. Su liderazgo lo conformaron integrantes del PRI de Chiapas incluyendo a un exdiputado estatal, Samuel Sánchez Sánchez<sup>10</sup>. Según

<sup>8</sup> La Organización Cafetera Autónoma de Ocosingo (ORCAO), fundada por campesinos dedicados a la industria cafetera y cercana al PRD, obedecía ante todo a una división religiosa en la zona, recordando que el PRD estuvo afiliado a la iglesia protestante durante mucho tiempo. Entre otros aspectos, la ORCAO atacó una tienda comunitaria zapatista en Cuxulja y destruyó un mural de enorme importancia simbólica para la comunidad (Ross, 2006: 125).

<sup>9</sup> Véase Ochoa León, 2011 para un estudio actualizado de este grupo.

<sup>10</sup> Otros ejemplos de priístas chiapanecos fueron el ex-militar y el ex-regidor Marcos Albino Torres López, los diputados federales Walter León Montoya y Alí Cancino Herrera y dos antiguos presidentes municipales.

un reporte publicado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro firmó un convenio con el grupo otorgándole casi cinco millones de pesos (medio millón de dólares) para “fomentar la actividad agroproductiva”. También puso en circulación una publicación clandestina “Ni Derechos, Ni Humanos”, sugiriendo con los demás datos que el grupo tenía estrategia política, psicológica, socioeconómica... y militar.

Algunos de los que firmaron el convenio incluyen el general Mario Renán Castillo, comandante de la VII Región militar que abarcaba toda la zona de conflicto, el secretario de gobierno y la procuraduría general de justicia de Chiapas. “Paz y Justicia” tuvo lazos con cuerpos de policías, grupos especiales del Ejército y con otros paramilitares como Los Chinchulines, un grupo instituido por el ex diputado priísta Pedro Chulín, quien tuvo lazos con el ex-gobernador chiapaneco Elmar Setzer Marseille. Setzer, que había sido despedido por no anticipar la rebelión zapatista y no tenía motivos para proteger al gobierno nacional<sup>11</sup>. Mientras tanto, el Movimiento Indígena Revolucionario Anti-Zapatista (MIRA) fue fundado por el ex-diputado priísta Norberto Santiz López —que curiosamente se considera abogado experto en derechos humanos— (Mandujano, 2005). Organizaciones como Los Carrancistas y “Justicia Social” también se beneficiaron de patrocinadores entre las élites estatales y recibieron un salario bisemanal de 600 pesos (\$60 USD, dos veces el salario mínimo) y entrenamiento de la Policía (Hernández Castillo, 2006: 78-9). Para completar la lista de los grupos más notorios, “Máscara Roja”, responsable de la masacre de Acteal, contó con el adiestramiento de oficiales del Ejército, aunque sus armas fueron adquiridas en el mercado privado, precisando que, cuando los policías confiscan armas a los narcotraficantes, muchas

---

<sup>11</sup> Según el Centro de Derechos Humanos Pro Juárez, “Paz y Justicia” fue asociado con por lo menos 40 asesinatos de simpatizantes zapatistas, más de 4.000 desplazados en la zona norte de la selva, 21 secuestros y 17 heridos (hasta mayo de 1997). A Los Chinchulines, que cambiaron su nombre por la Organización Para la Defensa de Indígenas y Campesinos (OPDIC) (Bellinghausen, 2007), se les atribuye como mínimo una docena de ataques entre 1995 y 1998. Todos los grupos paramilitares están asociados con aproximadamente 120 asesinatos, 21 desaparecidos y el desplazamiento de casi 22.000 indígenas entre 1995 y 2000 (González Velázquez, 2007).

de ellas suelen quedar en las manos oficiales antes de ser vendidas ilegalmente (Collier 1994: 84).

Por último, muchos ataques atribuidos a los paramilitares, especialmente durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006), fueron más bien el fruto de disputas personales. Por ejemplo, uno fue motivado por una pelea por una vaca, otro, por problemas entre las familias de una pareja recién casada porque la familia del novio no quiso cumplir con el acostumbrado pago a la familia de la comprometida (muchas comunidades indígenas aún tienen la tradición de vender a sus hijas). En otra ocasión hubo una trifulca entre zapatistas y el OPDIC cuando este último quería atravesar territorio zapatista en rumbo a una protesta en contra del Plan Puebla Panamá (PPP) (Ross, 2006: 150-1) promovido por el mismo presidente Fox, demostrando que los paramilitares también pueden ser el arma de sectores del Estado contra el Estado.

### **Los paramilitares como armas de “la provincia” en contra de “la capital”**

Tanto la masacre en Acteal, Chiapas, como los ataques paramilitares más recientes en Oaxaca son ejemplos de la divergencia de intereses de las élites estatales y el poder central. El operativo paramilitar de Acteal es una ilustración del escaso control que puede tener el Estado sobre eventos particularmente violentos. El operativo fue planeado por parientes de un miembro del PRI que fue asesinado por otro miembro del partido, supuestamente por no unirse a los paramilitares, de acuerdo con las conclusiones de una comisión que investigó el caso. Ahora bien, los familiares de la víctima creyeron en las versiones de los dos testigos que le echaron la culpa al EZLN y planearon el ataque en la casa del padre del occiso, contando con el apoyo del alcalde del municipio, quién a su vez tenía parientes en el gobierno estatal. El ataque fue la culminación de un conflicto que había empezado meses atrás cuando 11.000 zapatistas declararon la “autonomía” de un sector del municipio de 31.000 habitantes (Womack, 1999: 341-7).

Claramente, el presidente Ernesto Zedillo nunca apoyó a las élites priístas del municipio en conflicto. De tal manera que cuando el alcalde

le pidió permiso para que los residentes portaran armas, éste se lo negó y ordenó que el gobernador obligara al alcalde a conciliar la paz con los zapatistas. Las élites estatales apoyaron al menos pasivamente el operativo, encubriendo a los culpables sin investigar el asunto. Adicionalmente, no es nada improbable que la confrontación inicial, la cual dio lugar al asesinato, haya servido de acicate a élites estatales responsables de los hechos<sup>12</sup>. Los paramilitares contaron también con el apoyo de los policías que no tenían muchas opciones de acción ya que los indígenas estaban mucho mejor armados que ellos (Womack, 1999: 343) y formaban parte de un clientelismo rural.

El presidente Zedillo se quedó sorprendido y afectado por la masacre. Respondió mandando a unos 500 soldados del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (GAFES), un grupo élite del Ejército, para ocupar la comunidad y proteger a los habitantes que habían dejado la zona. Por otra parte, puso a la Procuraduría General de la República a cargo de la investigación. Despició a su secretario de gobernación y al gobernador de Chiapas y ordenó varios operativos para desarmar a los paramilitares (Ross, 2006: 36). Aunque se puede decir que el costo político del evento lo obligó a reaccionar de esta forma, sus decisiones sugieren que el Presidente se encontraba conmovido por la magnitud de la violencia. Pero, como las élites chiapanecas fueron las que implementaron sus órdenes, ninguno de sus esfuerzos resultó en el castigo de los paramilitares.

Con la llegada al poder del presidente Vicente Fox en el año 2000, el primer mandatario procedente de la oposición después de 71 años de hegemonía del PRI, parece que hubo un esfuerzo por parte del gobierno nacional para desmilitarizar a Chiapas y desarticular a los paramilitares. El mismo año que ganó las elecciones el presidente Fox, Pablo Salazar Mendiguchía salió victorioso de los comicios en representación de una coalición de partidos de oposición que quebraron el monopolio del PRI en Chiapas. Salazar dio marcha atrás al proyecto de remunicipalización que hubiera debilitado a los territorios

---

<sup>12</sup> Este supuesto se basa en decenas de entrevistas entabladas en la zona maya de Yucatán entre 1995 y 2006 donde se usaban estrategias idénticas a las de Chiapas para sofocar cualquier movimiento independiente.

autónomos del EZLN y encarceló a muchos de los paramilitares más notorios. Sin embargo, los grupos paramilitares siguen operando como evidencia del poco control que ejerce el Estado sobre la zona. Dentro de este contexto, el grupo “Paz y Justicia” se quebró en tres facciones (Ross 2006, 125). Sus acciones en contra de zapatistas en la zona norte continúan hasta la fecha pero sin tener aparentemente nexos con las fuerzas castrenses.

## Conclusiones

En definitiva, la formación de los grupos paramilitares en el sur de México comprueba ser un fenómeno complejo. Muchos observadores han querido describirlo como una estrategia represiva por parte de un Estado racista e intolerante que defiende los proyectos neoliberales de las clases dominantes a expensas de la gente más humilde y marginada: la población indígena. Un análisis del fenómeno a lo largo de una década en Chiapas invita a matizar el panorama. Demuestra que los actores involucrados en los paramilitares tienen agendas muy diversas. Asimismo, la violencia paramilitar se inserta muchas veces en luchas entre diferentes élites del Estado. Procede de contiendas entre diferentes corrientes ideológicas animadas por elites internacionales, nacionales, estatales y locales, al igual que de las disputas entre instituciones del viejo régimen revolucionario como el PRI y las organizaciones corporativas y las instituciones que luchan por reemplazarlas. Hay que tener en cuenta las luchas intracomunitarias entre varios grupos religiosos, los conflictos entre las facciones de los partidos políticos y el legado de rencillas históricas entre numerosas familias y los ciclos de venganza por incidentes particulares en un ambiente en que las armas son de fácil alcance y empleo que complican aún más el panorama.

El paramilitarismo se presenta entonces como una manifestación de la lucha enconada entre fracciones de élite, que se pueden calificar de disidencias, las cuales se oponen al proyecto de nación promovido por sectores que sustentan el poder central. Las élites tradicionales reaccionarias, las clases radicales de izquierda favorables al cambio y los miembros reformistas de derecha luchan por imponer una agenda ideológica, es decir, una visión de la democracia que sirva de

base al establecer nuevas reglas del juego en la arena socio-política. En estas circunstancias, las antiguas “guardias blancas”, los ejércitos privados que utilizaban los terratenientes chiapanecos para extender de manera impune su control sobre los terrenos de los campesinos, no se pueden comparar con los grupos paramilitares del presente, en la medida en que las luchas del pasado eran netamente locales y no expresaban mayores discordancias entre las élites.

En la post-Guerra Fría, la lucha de clases ha sido reemplazada por la lucha por el rescate cultural de los pueblos indígenas, lucha que, a pesar de enarbolar la democracia y no la violencia, tiene la misma meta que las luchas guerrilleras de antaño: establecer bases de apoyo que se opongan a las políticas económicas de facciones gobernantes y que promuevan una visión alternativa del buen gobierno. Los movimientos sociales de izquierda hoy abogan por un discurso y un concepto de la democracia que se contraponen al concepto de la democracia liberal avanzado por las élites dominantes después de la Guerra Fría. La concepción de una democracia radical o “revolucionaria” representa la adaptación de la izquierda radical a un mundo en el que la violencia es ilegítima; tiene que perseguir sus fines utilizando al sistema legal en vez de ocultarlo.

Ahora bien, la ley sigue teniendo un valor estrictamente instrumental para franjas de la izquierda radical. Por lo tanto, su vocación democrática es más para legitimar el movimiento que para renunciar a la violencia en una lucha contra las facciones gobernantes. Las ideas de “todas las formas de lucha” (utilizar tanto los canales institucionales y legales como los ilegales y violentos) y la “política de doble cara” (integrarse a programas del gobierno mientras que se arman para poder oponerse militarmente al Estado) siguen siendo relevantes para varios movimientos sociales recientes. Esta realidad explica en parte por qué dichos movimientos no siempre armados se han convertido en los blancos de la estrategia contrainsurgente del Estado, en la cual los grupos paramilitares han tenido un papel central aunque no hayan recibido un apoyo sistemático ni uniforme por parte de la fuerza pública.

Por consiguiente, los grupos paramilitares del sur de México son armas que en ocasiones las élites externas a las localidades han utilizado como piezas de ajedrez para atacar a los aliados externos de las comunidades, mucho más que para matar a indígenas por motivos racistas o intereses económicos. Hacen falta más estudios para confirmar qué porcentaje del fenómeno es manipulado por grupos externos y qué tan importante es el aspecto transnacional.

El riesgo de esta la lucha polifacética (los desafíos que representan los movimientos sociales y los grupos armados de izquierda para el Estado y la contra-ofensiva de las élites tradicionales al formar grupos paramilitares) es deshacer todos los avances que se realizaron en los años anteriores y permitir que los caciques vuelvan a imperar en las zonas más subdesarrolladas del país. De allí la tendencia general a un control recrudescido e insidioso en múltiples dimensiones en la región, el cual supera los mecanismos evidenciados en la materia antes de la rebelión zapatista.

## Bibliografía

- Aggarwal, Vinod K. (1993). "The Future of the Liberal Trading Order" en *The Post-Cold War International Order*, (comp.) R. Leaver y J.L. Richardson, Allen y Unwin: Sydney.
- Basañez, Miguel (1993). "Is Mexico Headed toward its Fifth Crisis?" en *Political and Economic Liberalization in Mexico*, (comp.) Riordan Roett, Lynne Rienner Publishers, Boulder: Colorado. pp.95-112.
- Bellinghausen, Hermann (2007) "La OPDIC, "sucesora de Los Chinchulines," *La Jornada*, 11 de marzo.
- Boraz, Steven (2007). "Case Study: The Guatemala-Chiapas Border", en *Ungoverned Territories. Understanding and Reducing Terrorism Risks*, (comp.) Angel Rabasa, et al. The Rand Corporation: Santa Monica.
- Carlsen, Laura (2010). "Mexico's State of Impunity", *The Huffington Post*, 9 de mayo.
- Cevallos, Diego (2008). "Mexico: Murder of Indigenous Reporters Fuels Hatred, Division." *IPS Latin America*, 12 de junio.
- Cívico, Aldo (2006). "Portrait of a Paramilitary", en *Engaged Observer. Anthropology, Advocacy, and Activism*, (comp.) Victoria Sanford y Asale

- Angel-Ajani, Rutgers University Press, New Brunswick, Nueva Jersey y Londres, pp. 131-46.
- Dahl, Robert (1956). *A Preface to Democratic Theory*, University of Chicago Press: Chicago.
- Díaz, Gloria Leticia (2010) “Una Lluvia De Balas Nos Envolvió” *Proceso*, 2 de mayo, pp. 20-24.
- Earle, Duncan y Simonelli, Jeanne (2005). *Uprising of Hope. Sharing the Zapatista Journey to Alternative Development*. Altamira Press, Rowman & Littlefield Publishers, Walnut Creek, Lanham, Nueva York, Toronto y Oxford.
- Eber, Christine (2003). “Buscando Una Nueva Vida. Liberation through Autonomy in San Pedro Chenalhó, 1970-1998.” En *Mayan Lives, Mayan Utopias*, (comp.) Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo and Shannan L. Mattiace, Rowman & Littlefield Publishers: Oxford y Maryland, pp. 135-59.
- Eber, Christine (2010). “Fallece indígena golpeado tras mitin en Chiapas”, *El Universal*, 2 de julio.
- Fukuyama, Francis (1989). “The End of History?” *The National Interest*, Summer: Washington.
- García, José Alejos (2003). “The Choòls Reclaim Palenque, or the War of the Eternal Return”. En *Mayan Lives, Mayan Utopias.*, (comp.) Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo y Shannan L. Mattiace. Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Boulder: Nueva York, Toronto, Oxford. pp. 85-102.
- González Velázquez, Eduardo (2007). “Paramilitarización en Chiapas. La historia continúa,” *La Jornada Jalisco*, 27 de abril.
- Hayman, Mari (2009). “Mexico: Chronicler of Oaxaca Struggle Finds Himself in a Lead Role” *IPS (Latin America)*, 14 de abril.
- Hernández Castillo, Rosalva Aída (2003). “Between Civil Disobedience and Silent Rejection. Differing Responses by Mam Peasants to the Zapatista Rebellion”. En *Mayan Lives. Mayan Utopias*, (comp.) Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo y Shannan L. Mattiace, Rowman & Littlefield Publishers, Lanham, Boulder: Nueva York, Toronto, Oxford. pp. 63-83.
- Hippler, Jochen (2006). “Low Intensity Warfare and Its Implications for NATO”. En *Counterinsurgency and Political Control*, (comp.) Jochen Hipler, Institute for Development and Peace: Duisberg, pp. 16-23, 34.
- Hyland, William (1993). “The Nature of the Post Cold War World. Reexamining National Strategy”, ponencia preparada para presentación

- en el U.S. Army War College Fourth Annual Strategy Conference, Carlisle, Pennsylvania.
- Lacey, Mark (2009). "Killing Is Questioned." *The New York Times*, 5 de febrero.
- Leyva Solano, Xochítl (2003). "Regional, Communal, and Organizational Transformations in Las Cañadas." en *Mayan Lives, Mayan Utopias*, (comp.) Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo y Shannan L. Mattiace, Rowman & Littlefield Publishers: Oxford., pp. 161-84.
- Lofving, Staffan (2004). "Paramilitaries of the Empire. Guatemala, Colombia, and Israel" *Social Analysis* 48, no. 1, pp. 156-60.
- Lyll, Jason (2010). "Are Coethnics More Effective Counterinsurgents?" *American Political Science Review* 104, N° 1, pp.1-20.
- Malkin, Elizabeth (2008). "Mexico Says U.S. Journalist Was Killed by a Protester." *New York Times*.
- Mandujano, Isaín (2005). "Apresan a Norberto Santíz López," *Proceso*, 11 de noviembre de 2005.
- Manwaring, Max (2004). "Shadows of Things Past and Images of the Future: Lessons for the Insurgencies in Our Midst". En *Insurgency and Counterinsurgency in the 21st Century*. Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania.
- Mattiace, Shannan L. (2003). *To See with Two Eyes. Peasant Activism & Indian Autonomy in Chiapas, Mexico*, University of New Mexico Press: Albuquerque.
- Mattiace, Shannan L. (2003). "Regional Renegotiations of Space. Tojolabal Ethnic Identity in Las Margaritas, Chiapas". En *Mayan Lives, Mayan Utopias*, (comp.) Jan Rus, Rosalva Aída Hernández Castillo y Shannan L. Mattiace, Rowman & Littlefield: Londres. pp. 109-33.
- McKinley, James Jr. "Keeping His Spies Close, and Maybe a Cartel Closer" *The New York Times*, Abril 21 2010, A-11.
- Moksnes, Heidi (2004). "Militarized Democracies. The Neoliberal Mexican State and the Chiapas Uprising." *Social Analysis* 48, N° 1, pp. 116-25.
- Montemayor, Carlos (1997), *Chiapas. La Rebelión Indígena de México*. México, D.F.: Joaquín Mortíz: México, D.F.
- Norget, Kristin (2005). "Caught in the Crossfire: Militarization, Paramilitarization, and State Violence in Oaxaca, Mexico". En *When States Kill. Latin America, the U.S., and Technologies of Terror*, Cecilia Menjivar and Nestor Rodríguez (comp.), The University of Texas Press: Austin. pp. 115-142.

- Ochoa León, Pauline (2011). Conflicto armado y grupos paramilitares en Chiapas: implicaciones para la democracia mexicana,” *Desafíos*, Universidad del Rosario: Bogotá. Vol. 23, No.1
- Olesen, Thomas (2005). *International Zapatismo. The Construction of Solidarity in the Age of Globalization*. Zed Books: Londres y Nueva York.
- Olney, Patricia (2004). “Global Order, Local Chaos: Explaining Paramilitary Violence in Chiapas, Mexico and Colombia”, *Low Intensity Conflict & Law Enforcement*, Center for Hemispheric Defense Studies: Wahsington. pp. 1-36.
- Ross, John (2006), *¡Zapatistas! Making Another World Possible. Chronicles of Resistance 2000-2006*. Nation Books: Nueva York.
- Rus, Jan, y Collier, George A. (2003). “A Generation of Crisis in the Central Highlands of Chiapas. The Cases of Chamula and Zinacantán, 1974-2000”. En *Mayan Lives, Mayan Utopias. The Indigenous Peoples of Chiapas and the Chiapas Rebellion*, Rowman & Littlefield, Lanham, Boulder: Nueva York, Toronto, Oxford, pp. 33-61.
- Rus, Jan, Rosalva Aída Hernández Castillo, y Shannan L. Mattiace (2003), (comp.) *Mayan Lives, Mayan Utopias*, Rowman & Littlefield Publishers, Oxford, y Lanham.
- Sekwat, Alex y Lynch, Thomas (1995). “The World´s Trading System in the Post Cold War Era: Implications for Public Administration.” *International Journal of Public Administration* 18, no. 11, pp. 1753-73.
- Speed, Shannon (2006). “Indigenous Women and Gendered Resistance in the Wake of Acteal.” En *Engaged Observer. Anthropology, Advocacy, and Activism*, (comp.), Rutgers University Press: New Brunswick, Nueva Jersey y Londres, pp. 170-188.
- Speed, Shannon (2008), *Rights in Rebellion: Indigenous Struggle and Human Rights in Chiapas*, Stanford University Press: Stanford.
- Stahler-Sholk (1988). “Massacre in Chiapas.” *Latin American Perspectives* 25, N° 4, pp. 63-75.
- Stout, Robert Joe (2010). “Awakening in Oaxaca: Stirrings of the People’s Giant” *Monthly Review*, 10 de junio.